



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

CUARTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXX

Morelia, Mich., Viernes 13 de Julio de 2018

NÚM. 32

C O N T E N I D O

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

ACUERDO NÚMERO 17/2018 QUE EXPIDE EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL CUAL SE DELEGAN AL TITULAR DE LA AGENCIA DE INTELIGENCIA CRIMINAL, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LAS FRACCIONES II Y XVI DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, VINCULADO CON LOS ARTÍCULOS 291 Y 303 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; ASÍ COMO 189 Y 190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN.

JOSÉ MARTÍN GODOY CASTRO, Procurador General de Justicia del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 y 100 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo; 18, 27, 30 fracciones IX, XXII, XXIV, y 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como 5º fracciones II y XIV de su Reglamento;

CONSIDERANDO

La Procuraduría General de Justicia es la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado en la que se integra la institución del Ministerio Público para el despacho de los asuntos que le atribuye el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 y 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, la Ley Orgánica de la Institución y su Reglamento.

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que exclusivamente la autoridad federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del Titular del Ministerio Público de la Entidad Federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

En términos de los artículos 18 de la Ley Orgánica y 5º párrafo primero de su

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
Ing. Pascual Sigala Páez

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 100 ejemplares

Esta sección consta de 4 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 27.00 del día

\$ 35.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial
www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

Reglamento, al frente de la Procuraduría y del Ministerio Público estará el Procurador, quien preside el Ministerio Público en el Estado, bajo las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así como su Ley Orgánica de la Institución y su Reglamento, así como las demás disposiciones aplicables.

De conformidad con el artículo 5° párrafo segundo del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, el Procurador General de Justicia podrá delegar sus facultades en servidores públicos subalternos mediante disposiciones de carácter general o particular sin perder por ello la posibilidad de ejercicio directo.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 291 del Código de Procedimientos Penales se podrá solicitar al Juez federal de control competente, por cualquier medio, la autorización para practicar la intervención de comunicaciones privadas, expresando el objeto y necesidad de la misma.

Por su parte el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales que cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentra relacionada con los hechos que se investigan, el Procurador, o el servidor público en quien se delegue la facultad, podrá solicitar al Juez de control del fuero correspondiente en su caso, por cualquier medio, requiera a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, para que proporcionen con la oportunidad y suficiencia necesaria a la autoridad investigadora, la información solicitada para el inmediato desahogo de los actos de investigación a que se refiere el ordinal en cita.

De igual forma, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de junio de 2014, establece en su Título Octavo, denominado «De la colaboración con la justicia» las obligaciones que en materia de seguridad y justicia tienen los concesionarios de telecomunicaciones, y en su caso los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos. Así como dispone en su artículo 189 y 190 que los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia, designen a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la información correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Con fecha 15 de mayo del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 3/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, el cual en su transitorio Séptimo abrogó el Acuerdo General 39/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crean los Juzgados de Distrito Especializados en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación.

Dicha modificación derivada de la carga de trabajo de los Juzgados de Distrito Especializados en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación, permitió la creación del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, como un área competente para conocer y resolver de las solicitudes presentadas por el Ministerio Público, en toda la República, para lo cual se integrará por seis Jueces de Control y un Tribunal Unitario de Circuito.

El uso de las nuevas tecnologías en el contexto de implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial en la entidad, ha obligado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a contar con áreas especializadas en la recolección y análisis de datos para la obtención de información, sistematización y el uso de dichas herramientas, tal como la Agencia de Inteligencia Criminal.

No obstante, a efecto de lograr investigaciones más prontas y eficientes en los asuntos de competencia de dicha área, así como con el objetivo de mantener la rigurosidad del control y protección de la información confidencial de los ciudadanos que se administra en las concesiones de telecomunicaciones, y en su caso con los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos que tengan bajo su resguardo, es necesario delegar al Titular de la Agencia de Inteligencia Criminal, diversas facultades en materia de intervención de comunicaciones, localización geográfica en tiempo real y entrega de datos conservados, para lo cual he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ARTÍCULO 1°. El presente Acuerdo tiene por objeto delegar al Titular de la Agencia de Inteligencia Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán las facultades contenidas en las fracciones II y XVI del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que en materia de telecomunicaciones privadas gestione los requerimientos que se realicen a los concesionarios y reciba la información correspondiente, en términos de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así

como 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales para solicitar al Juez de Control del fuero correspondiente la autorización para practicar la intervención de comunicaciones privadas y la extracción de información; y 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que requiera a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, proporcionen con la oportunidad y suficiencia necesaria la información solicitada para el inmediato desahogo de los actos de investigación de su competencia.

ARTÍCULO 2°. Se delegan al Titular de la Agencia de Inteligencia Criminal las facultades contenidas en el párrafo sexto y octavo, del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales a efecto de que, bajo su más estricta responsabilidad, pueda requerir directamente a los concesionarios de telecomunicaciones, así como a los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, la siguiente información:

- I. La relativa para determinar la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados, a que se refiere el párrafo sexto del ordinal precitado y;
- II. La conservación inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática, o que se realcen desde cualquier tipo de línea que utilice la numeración propia o arrendada bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión, los datos enunciados en la fracción segunda del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; facultad que se encuentra contenida en el párrafo octavo del numeral en cita.

La delegación de facultades del presente acuerdo se realiza sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del Procurador General de Justicia del Estado.

ARTÍCULO 3°. El ejercicio de la facultad relativa a los requerimientos de localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados que se refiere la fracción I del artículo precedente, se realizará en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, y procederá únicamente en caso de que esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada.

De igual forma, a partir de que se haya cumplimentado el requerimiento, el Titular de la Agencia de Inteligencia Criminal, deberá informar al Juez de control competente por cualquier medio que garantice su autenticidad, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, a efecto de que ratifique

parcial o totalmente de manera inmediata la subsistencia de la medida, sin perjuicio de continuar con su actuación.

ARTÍCULO 4°. Los requerimientos a que se hace referencia el artículo 2° del presente Acuerdo, se deberán realizar por escrito, de manera fundada y motivada, bajo su más estricta responsabilidad.

Si las solicitudes a que se refiere el presente acuerdo, requieren para su resolución que se verifique audiencia privada ante la autoridad judicial, el Titular de la Agencia de Inteligencia Criminal podrá habilitar al Agente del Ministerio Público que corresponda para que comparezca al desahogo de dicha audiencia.

ARTÍCULO 5°. La entrega de la información se realizará conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como a los lineamientos que en la materia emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

ARTÍCULO 6°. Los Agentes del Ministerio Público que consideren necesario requerir a los concesionarios y a las comercializadoras de servicios de redes públicas de telecomunicaciones, la información a que se refieren el Título Octavo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, deberán presentar el requerimiento debidamente fundado y motivado, al Titular de la Agencia de Inteligencia Criminal, para que se realice por su conducto.

ARTÍCULO 7°. Los datos proporcionados por los concesionarios, autorizados o proveedores, sólo podrán ser conocidos por el servidor público designado mediante este Acuerdo y resguardado por los agentes del Ministerio Público que tenga bajo su responsabilidad y trámite la investigación de que se trate, por lo que deberá guardar estricta confidencialidad respecto a la información obtenida.

ARTÍCULO 8°. El servidor público que quebrante la confidencialidad de actuaciones de investigación en las que obre información o datos que hayan sido proporcionados por concesionarios, autorizados o proveedores de telecomunicaciones, será sujeto de responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Estado, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, el Código Penal del Estado y demás disposiciones que resulten aplicables.

ARTÍCULO 9°. Se delega al Titular de la Agencia de Inteligencia Criminal, la facultad de solicitar ante el Juez Federal de Control competente, la autorización para intervenir comunicaciones privadas, extraer información, así como solicitar prórrogas para el plazo de la intervención, conforme a lo dispuesto por los artículos 291 y 292 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ARTÍCULO 10. Los agentes del Ministerio Público que consideren necesaria la intervención de comunicaciones privadas o extracción de información guardada en dispositivos electrónicos y de telefonía móvil, para la debida integración de las averiguaciones previas o carpetas de investigación a su cargo, solicitarán por escrito al Titular de la Agencia de Inteligencia Criminal, que presente la solicitud correspondiente ante la autoridad judicial federal competente.

La solicitud a que se refiere el párrafo que antecede, deberá contener el acuerdo del agente del Ministerio Público en el que funde y motive su procedencia, y la indicación del tipo de comunicaciones materia de la intervención, los sujetos y lugares a intervenir y el periodo que abarcará la intervención y, en su caso, las líneas, aparatos, números y los demás datos que resultaren necesarios.

ARTÍCULO 11. En caso de ser procedente la destrucción de los registros, el Titular de la Agencia de Inteligencia Criminal corroborará que esta se realice de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el numeral 300 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ARTÍCULO 12. El Titular de la Agencia de Inteligencia Criminal deberá realizar los trámites conducentes ante el Consejo de la Judicatura Federal para obtener su firma digital, en los términos establecidos en el Acuerdo General 3/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 13. En todos los casos, los agentes del Ministerio Público deberán especificar ante el Titular de la

Agencia de Inteligencia Criminal la modalidad del requerimiento de información:

- a) Directamente ante los concesionarios y los comercializadores de servicios de redes públicas de telecomunicaciones, para que la información sea proporcionada en un plazo máximo de 24 horas, en los términos del Título Octavo de la Ley Federal de Telecomunicaciones; o,
- b) Ante el Juez de control que corresponda, para que la información sea proporcionada en forma inmediata y sin demora, en términos del artículo 291, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán.

SEGUNDO. Se instruye a la Directora General Jurídica y de Derechos Humanos para que lleve a cabo las gestiones necesarias para la publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán y en el Diario Oficial de la Federación, en atención a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como para su difusión entre el personal de esta Institución.

Así lo acordó y firma el maestro José Martín Godoy Castro, Procurador General de Justicia del Estado.

Morelia, Michoacán a 06 de julio de 2018. (Firmado).